

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta 011**

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ORFA ACEVEDO JIMENEZ** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**.

**AUTO**

Se reconoce personería para actuar en representación de **COLPENSIONES** al Dr. **DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO** identificado con CC No. 80.845.672y T.P. 271.442 del C. S .de la J., a quien le fue sustituido el poder por el Dr. **SANTIAGO MUÑOZ MEDINA** identificado con 16.915.453y T.P.Nro.150.960 del C. S .de la J., conforme documento que fue remitido con los alegatos de conclusión.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

La demandante solicita que se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS a través de **Protección S.A.**; y en consecuencia, se condene a la administradora privada a devolver a **Colpensiones** la totalidad de los aportes contenidos en su cuenta de ahorro individual con sus respectivos intereses, y a **Colpensiones** a tenerla como su afiliada.

Se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez, el retroactivo pensional y los intereses moratorios (fls.2/3).

### **Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **7 de mayo de 1961** y fue afiliada al régimen de prima media con prestación definida a partir del **1 de abril de 1982**.

En el mes de **agosto de 1998** se trasladó al RAIS administrado por **Protección S.A.**, sin que previa su vinculación se le suministrara información acerca de las implicaciones del traslado de régimen (fls.1/2).

### **Respuesta Colpensiones**

**Colpensiones** a través de apoderada indicó que son ciertos los hechos, excepto el que tiene que ver con las condiciones en que la demandante se vinculó al RAIS las cuales no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, improcedencia de intereses moratorios, buena fe, prescripción, compensación indexada e imposibilidad de condena en costas (fls.90/94).

### **Respuesta de Protección S.A.**

**Protección S.A.** por intermedio de apoderada manifestó que es cierto que la demandante se vinculó a esa administradora, precisando que al momento de suscribir el formulario de traslado se le suministró una información cierta, clara y veraz, en la cual se le indicó los efectos y consecuencias del traslado de régimen.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe, aprovechamiento indebido de recursos públicos, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional y prescripción (fls.120/138).

### **Sentencia de primera instancia**

La Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **11 de diciembre de 2019**, negó la prosperidad de las pretensiones, argumentando al efecto que conocedora del precedente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de ineficacia de traslado, se aparta del mismo en el caso de

la actora en consideración a que el mismo presenta circunstancias particulares que deben ser estudiadas.

Para esto advirtió que la actora no era beneficiaria del régimen de transición y fue reasesorada por **Protección S.A.**, siéndole indicado claramente por esta administradora que de mantenerse en el RAIS su pensión sería menos favorable, luego, no es predicable la existencia de una falta de información, puesto que, la demandante conoció claramente el hecho que discute pero resolvió mantenerse afiliada a ese régimen pensional.

Esta decisión no la compartió el apoderado de **la parte actora**, motivo por el cual la impugnó en los siguientes términos generales:

### **Recurso demandante**

Solicita el recurrente que se revoque la decisión de primera instancia, por cuanto el deber de información era predicable de **Protección S.A.** desde la fecha de vinculación, sin que se pueda afirmar que se puede convalidar la omisión de este deber con acciones posteriores.

Para sustentar su recurso indica que los actos viciados de ineficacia no pueden sanearse o ratificarse, pues lo que sanciona es la falta de unos requisitos legales en su formación.

En lo que toca con el reconocimiento de la pensión de vejez indica que la actora cumplió los requisitos para acceder a esta prestación desde el 7 de mayo de 2018 y en ese sentido se deben reconocer los intereses moratorios y la indexación.

### **Alegatos de conclusión**

Una vez corrido el término de traslado establecido por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, el apoderado de **Colpensiones** presentó alegaciones en las que solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, en atención a que no se puede desconocer que en el deber de información existen unas cargas mínimas que deben ser demostradas por el afiliado las cuales en el caso bajo estudio no fueron acreditadas por la demandante.

### **Problema jurídico**

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia de conformidad con el recurso interpuesto, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó

el traslado de régimen de la demandante resulta o no eficaz, (ii) Establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia, (iii) si operó la prescripción; y en caso de que prospere la pretensión de ineficacia: (iv) Establecer si la demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el RPM, (v) la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud a cargo de los pensionados y (vi) si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o, en su lugar la (vii) indexación de las eventuales condenas.

### CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Orfa Acevedo Jiménez** nació el **7 de mayo de 1961** (fl.185).
2. La actora fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** el día **1 de abril de 1982**, efectuando cotizaciones esta administradora hasta el 30 de septiembre de 1998 por un total de 662 semanas (fl.96).
3. El día **4 de agosto de 1998**, la demandante suscribió formulario de vinculación a la **AFP Protección S.A.**, la cual se hizo efectiva desde el **1 de octubre de 1998** (fls.150-154).
4. El día **18 de abril de 2008**, la señora **Acevedo Jiménez** recibió reasesoría de parte de **Protección S.A.**, oportunidad en la que se le indicó que tenía como fecha límite para trasladarse de régimen pensional el 6 de mayo de 2008 y que no le convenía económicamente mantenerse en el RAIS (fl.151).
5. Entre el **1 de octubre de 1998** y el **28 de febrero de 2015**, la actora cotizó por un total de **825.14 semanas** (fls158/172).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

#### **El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional**

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de

pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688-2019 SL4360-2019, SL4426-2019, SL2611- 2020 y SL2877-2020

En las últimas providencias citadas, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de la **AFP Protección S.A.**, se efectuó el **4 de agosto de 1998**, lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual según lo expresado en la sentencia SL-1452-2019 la obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Los conceptos de información necesaria y transparente son definidos en la providencia citada de la siguiente forma:

**Información necesaria:** consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

**Transparencia:** La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones privada, y es la de demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** indicó que su afiliada fue asesorada de forma clara, cierta y veraz acerca de los efectos y consecuencias del traslado de régimen (fl.120), sin que en este aspecto se allegará prueba de que al momento de la vinculación se actuó bajo esas reglas de conducta; debiendo recordarse que el formulario de vinculación no demuestra nada de las condiciones en que se captó a la afiliada, siendo el formato de traslado un requisito formal del traslado que como indicara la Corte en la sentencia SL4426-2019 acredita la existencia de un consentimiento sin vicios, pero no informado.

En esa línea queda por establecer si la posterior reasesoría suministrada el **18 de abril de 2008**, en la que se le indicó a la actora que sería más beneficioso desde lo económico trasladarse al RAIS puede sanear su conducta inicial o convalidar la afiliación, entendiendo por lo tanto que la omisión al momento de la afiliación se tiene por subsanada con la información presentada con posterioridad.

Para este fin es necesario recordar que la Corte Suprema de Justicia ha abordado el tema del traslado de régimen pensional desde la institución de la **ineficacia**, institución jurídica que conforme con la doctrina especializada<sup>1</sup> puede darse en dos sentidos, amplio y estricto.

El primero consistente en *“la ineptitud, la falta de idoneidad, la carencia de efectividad de un acto o negocio jurídico para desencadenar efectos negociales...”*, y que se deriva de los siguientes factores:

1. Los sujetos que participaron en los tratos prenegociales desatendieron alguna o algunas de las prescriptivas del segmento del orden jurídico imperativo que gobierna el ejercicio de la autonomía privada.

---

<sup>1</sup> Baquero, E. R. (2008). *La ineffectividad en el negocio jurídico*. Alianza Editorial. Págs. 21-23.

2. Que en ejercicio de la autonomía privada los tratantes introdujeron condiciones de hecho o condiciones de derecho en contenido del acto negocial que no se cumplieron.
3. Situaciones tales como el ajuste del acto estando viciada la voluntad de alguno de los sujetos negociales, la ilicitud de los motivos inductivos al perfeccionamiento del negocio, la celebración del negocio con fines a fraude a los acreedores y el cierre del acto en detrimento sensible de los intereses patrimoniales de alguna de las partes.

Entre tanto, en su segunda acepción, la del *stricto sensu*, la ineficacia implica que el negocio jurídico exista y sea válido, pero existen factores externos a su estructura que le privan de producir efectos.

Esta figura o mejor su ocurrencia es explicada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-345 de 2017, donde se expresa:

...la ineficacia en sentido estricto se presenta en aquellos casos en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesaria la existencia de una declaración judicial en ese sentido

A partir de esta manifestación se encuentra que uno de los factores externos a los que se alude, se encuentran en la ley y conforme con lo explicado por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-4360 de 2019 son aplicables a modo de sanción cuando se atente contra la libertad de selección de los afiliados del régimen pensional, lo que en el caso de las administradoras de pensiones se verifica cuando teniendo un deber legal de información omitieron suministrar la misma en condiciones suficiencia y objetividad.

En la providencia que se viene de citar la Corte hace una diferencia entre las figuras de inexistencia, nulidad absoluta y relativa e ineficacia en sus dos sentidos, para concluir que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra la figura de la ineficacia en sentido estricto, pues en ella se sanciona: “...cualquier atentado o transgresión contra el derecho del trabajador a la afiliación libre y voluntaria a un régimen pensional... con la ineficacia del acto.”

Una vez dilucidado lo anterior, advierte la Sala que al tratarse de un trasgresión de la ley, no puede ser saneada o convalidada, por cuando no es posible sanear

aquello que nunca produjo efectos, siendo importante en este aspecto recordar lo enseñado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1688 de 2019:

Es claro entonces que la referencia de la AFP accionada a que el demandante no demostró vicios de error, fuerza o dolo es inaplicable, al igual que su alegación de saneamiento del acto, puesto que, a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos.

En línea con lo anterior, no encuentra razón esta Sala para desestimar la pretensión de ineficacia de la actora, por lo que en consecuencia, **revocará** la decisión de primera instancia y en su lugar declarará ineficaz la afiliación de la señora **Orfa Acevedo Jiménez** al RAIS a través de **Protección S.A.** en los términos de inciso 1º del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por lo que se entenderá afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado en la actualidad por **Colpensiones**.

#### **Implicaciones de la declaratoria de ineficacia para las administradoras de pensiones**

La Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008 advirtió sobre la necesidad que existe cuando se declare lo que para aquel momento se denominó *nulidad* de que la administradora de pensiones que la generó devuelva todo lo recibido para lo cual se debe aplicar el artículo 1746 del Código Civil que trata sobre las restituciones mutuas en los eventos de nulidad relativa y el artículo 963 del Código de Comercio, que establece que el aumento del valor del bien quedara en cabeza del vendedor (en este caso del afiliado) cuando la restitución se deba a incumplimiento del comprador (AFP RAIS).

Esta teoría fue desarrollada por más de 10 años por la jurisprudencia especializada laboral, que, en sentencia SL-4360 de 2019, explicó que al no existir un camino demarcado por el legislador cuando se declare la ineficacia en *stricto sensu*, la institución de inmediata referencia es la nulidad que consagra unas consecuencias idénticas, consistentes en la vuelta al *statu quo ante*.

Para la vuelta a ese estado inicial del negocio regulada en el artículo 1746 del CC, es necesario además tener en cuenta que la seguridad social se rige por unos principios que le son propios y que deben ser aplicados por el juez con el fin de que la vuelta a ese statu quo se dé a través de soluciones que resarzan y



compensen los perjuicios ocasionados al afiliado, los que conforme con la jurisprudencia se resumen en los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM<sup>2</sup>.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador<sup>3</sup>.
3. **Los gastos de administración:** De conformidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, el 3% de la cotización de los afiliados se destinará se a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, concepto que al declararse la ineficacia de la afiliación y la ficción de que las cosas vuelvan al estado inicial como si esta no se hubiera producido, debe ser devuelto a la administradora del RPM debidamente indexado, puesto que no esta obligada la entidad que no tuvo nada que ver con la infracción a la ley a soportar sus efectos privándosele de recibir los mismos, máxime cuando el mismo artículo 20 también consagra este concepto en su favor<sup>4</sup>.
4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

<sup>3</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

<sup>4</sup>En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ-SL 2611-2020 y CSJ SL 2877-2020.

<sup>5</sup>Esta orden en particular cuenta con reciente sustento jurisprudencial en la sentencia SL 2877-2020, en la cual la Corte Suprema de Justicia la encontró procedente, máxime cuando estos recursos los

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que se debe **condenar a Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **Orfa Acevedo Jiménez**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los dineros cobrados por concepto de gastos de administración con cargo a su propio patrimonio y debidamente indexados a la fecha del traslado, concepto que incluye: los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

Como consecuencia de lo anterior, **ordenar a Colpensiones** recibir estos recursos acreditándolos en términos de semanas cotizadas a nombre de su afiliada **Orfa Acevedo Jiménez**.

### **De la excepción de prescripción**

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia implica la carencia de efectos del negocio jurídico, y en ese sentido no es posible aplicar las normas que sobre prescripción establece el artículo 1740 del Código Civil, por cuanto el paso del tiempo no puede sanear un acto que no produjo consecuencias jurídicas, sobre este aspecto se remite a la lectura de la sentencia SL-1688 de 2019.

### **Del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003**

El artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece que tendrán derecho a la pensión de vejez, las afiliadas mujeres que reúnan las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido 55 años. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementó la edad a 57 años.
2. 1000 semanas de cotización, incrementadas a 1050 a partir del 1 de enero de 2005, y en los años sucesivos a partir del 1 de enero de 2006 en 25 semanas hasta alcanzar en 2015 un número de 1300 semanas.

En el caso de la señora **Acevedo Jiménez** se encuentra que cumplió 57 años de edad para el **7 de mayo de 2018** y para aquella fecha acreditaba **1489 semanas** cotización (fl.158), por lo que tiene satisfechos los requisitos para acceder a la pensión de vejez reclamada.

### **Disfrute de la prestación**

En lo que tiene que ver con el momento en que la actora adquirió el status de pensionada no cabe duda que fue el **7 de mayo de 2018** cuando cumplió los requisitos de edad y tiempo de cotizaciones, y dado que, dejó de cotizar desde el ciclo de **febrero de 2015** y radicó demanda para el reconocimiento de su derecho el **23 de diciembre de 2018** (fl.28) advierte la Sala que existe una manifestación inequívoca que conduce a concluir su voluntad de recibir la pensión de vejez desde el momento mismo en que cumplió con las condiciones para pensionarse, por lo que se declarará que tiene derecho a la pensión de vejez a partir del **7 de mayo de 2018**.

### **De la cuantía de la prestación**

Tratándose de una pensión propia de Ley 100 de 1993, esta prestación debe ser liquidada de conformidad con el artículo 21 que indica que el IBL se obtiene del “... *promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.*” o el de toda la vida laboral cuando cuente con más de 1250 semanas.

En el caso estudiado procedió la Sala a liquidar el valor de la prestación teniendo en cuenta el promedio de los 10 últimos años para lo cual tomo como variables el IPC vigente para el **31 de diciembre del 2017** fijado por el DANE en 96,92 y los últimos 3600 días efectivamente cotizados entre el **20 de febrero de 2015** y el **17 de octubre de 2004**, encontrando que el IBL asciende a la suma de **\$ 3'594.135**.

En lo referente a la tasa de reemplazo el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, dispone que será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Porcentaje del ingreso de liquidación =  $65.50 - 0.50 \times \text{número de salarios mínimos legales mensuales vigentes}$ .

Efectuado este cálculo en el caso de autos<sup>6</sup>, se encuentra que la tasa de reemplazo base es de 63.20% al que sumado un 4.5% adicional por 189 semanas en exceso arroja una tasa de reemplazo del **67.70%** y una mesada pensional para el 2018 de **\$2´433.229**.

**Procedencia de la prescripción y valor del retroactivo adeudado**

Con relación a la **excepción de prescripción** encuentra la Sala que la misma no se configura en el caso de autos, por cuanto la prestación se hizo exigible desde el **7 de mayo de 2018** y radicada la demanda el 23 de noviembre de esa anualidad no se encuentra transcurrido el término trienal consagrado en el artículo 151 del CPT y SS, por lo que no se encuentra que existan mesadas afectadas por este fenómeno extintivo de las obligaciones.

En cuanto al valor del retroactivo causado entre el **7 de mayo de 2018** y el **31 de diciembre de 2020** asciende a la suma de **\$ 87.928.402**.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2018	3,18%	8,8	\$ 2.433.229	\$ 21.412.415
2019	3,80%	13	\$ 2.510.606	\$ 32.637.874
2020	1,61%	13	\$ 2.606.009	\$ 33.878.113
			TOTAL	\$ 87.928.402

A partir del **1 de enero de 2021** deberá **Colpensiones** continuar reconociendo a la actora por concepto de mesada pensional la suma de **\$ 2´647.965** a razón de 13 mesadas por anualidad.

**Obligatoriedad de las cotizaciones al sistema de salud a cargo de los pensionados**

Unido al retroactivo pensional esta lo atinente a los descuentos en salud, los cuales por ministerio de la ley están a cargo de los pensionados, tal como lo indica el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, el cual dice de manera textual lo siguiente:

La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos...

<sup>6</sup> R= 65.50- 0.50 x (\$ 3.594.135/\$781.242)  
R= 65.50- 0.50 x (4,6)  
R= 65.50- 2.3  
R= 63.20

Frente al tema del principio de solidaridad que tienen los pensionados frente al sistema, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Corte Constitucional, que en la sentencia C-126 de 2000, al declarar exequible el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, esta ha sido una postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en varias sentencias, entre otras en SL-529 de 2020, donde se ha indicado que el pensionado está obligado a efectuar el respectivo aporte desde el momento en que ostenta tal calidad.

En este orden de ideas, se **autorizará a Colpensiones** descontar del valor de las mesadas ordinarias<sup>7</sup> que componen el retroactivo, el porcentaje de las cotizaciones en salud a cargo de la pensionada, valor que deberá a su vez trasladar a la EPS a la que se encuentre afiliada la actora.

### **Procedencia de los intereses moratorios y/o la Indexación**

Con respecto a la pretensión encaminada al reconocimiento de intereses moratorios, encuentra la Sala que los mismos no son procedentes en razón de que solo en virtud de esta sentencia se entiende que la demandante ha estado afiliada a **Colpensiones**, sin que con anterioridad pudiera la entidad demandada tomar una decisión frente a la pensión de vejez reclamada.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la indexación que se propone como subsidiaria encuentra la Sala que la misma procede, pues se recuerda su finalidad no es otra que traer a valor presente una deuda laboral o pensional con el índice precios al consumidor-IPC-certificado por el DANE, para así paliar los efectos negativos que le causa la inflación económica al valor nominal en el transcurso del tiempo, por lo que siendo claro que en el presente caso se condenará al pago de dineros pasados hay lugar a que los mismos se actualicen, y en ese orden se condenará a **Colpensiones** a su pago para lo cual deberá tener en cuenta la fecha de causación de cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional.

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A.** de conformidad con lo expuesto en el numeral 4) del artículo 365 del Código General del Proceso. Las

---

<sup>7</sup> Lo anterior por cuanto no proceden descuentos en salud sobre las mesadas adicionales, de conformidad con el Decreto 1073 del año 2002.

agencias se fijan en **\$908.526**. En la primera se revocan las impuestas y en su lugar se condena a **Protección S.A.** al pago de las mismas.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**REVOCAR** la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el día **11 de diciembre de 2019**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ORFA ACEVEDO JIMENEZ** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**, para en su lugar:

**PRIMERO: DECLARAR** la **INEFICACIA** de la afiliación de **ORFA ACEVEDO JIMENEZ** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, suscrita el **4 de agosto de 1998**, por los motivos expuestos. En consecuencia, **DECLARAR** que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida administrado por el **ISS** hoy **COLPENSIONES**.

**SEGUNDO: CONDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **COLPENSIONES** los siguientes conceptos recibidos con motivos de la afiliación de la demandante: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **ORFA ACEVEDO JIMENEZ**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los dineros cobrados por concepto de gastos de administración con cargo a su propio patrimonio y debidamente indexados a la fecha del traslado, concepto que incluye: los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

**TERCERO: ORDENAR** a **COLPENSIONES** que una vez recibidos estos recursos proceda a acreditarlos en términos de semanas cotizadas a nombre de la señora **ORFA ACEVEDO JIMENEZ**, quien se entenderá como afiliada al RPM sin solución de continuidad.

**CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES** a que una vez recibidos los dineros provenientes del **RAIS**, proceda a reconocer y pagar a la demandante la pensión de vejez consagrada en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la cual se causó desde el **7 de mayo de 2018**. El valor del retroactivo adeudado entre esa fecha y el **31 de diciembre de 2020** es de **\$ 87.928.402**.

A partir del **1 de enero de 2021** deberá continuar reconociendo una mesada pensional de **\$ 2'647.965** a razón de 13 mesadas por anualidad.

**QUINTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES** a descontar del valor de las mesadas ordinarias que componen el retroactivo, el porcentaje de las cotizaciones en salud a cargo de la pensionada, valor que deberá a su vez trasladar a la EPS a la que se encuentre afiliada la actora.

**SEXTO: ABSOLVER a COLPENSIONES** respecto de las pretensiones de intereses moratorios, en su lugar se **CONDENA** al pago de la indexación en los términos expuestos en la parte motiva.

**SÉPTIMO:** Costas en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A.** Las agencias se fijan en **\$908.526**. En la primera se **REVOCAN** las impuestas y en su lugar se condena a **PROTECCIÓN S.A.** al pago de las mismas.

La anterior decisión se notifica por **ESTADOS**.

#### LOS MAGISTRADOS

  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

  
**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

Radicado 05001-31-05-017-2018-00819-01  
Radicado Interno P4201921  
Asunto: Revoca sentencia

**CERTIFICO:** Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS N° 015** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín, **01 de febrero de 2021**

---

Secretario.